

TRANSACCIONES MAYO 2018

Los datos de los Titulares Reales de las Entidades Mercantiles serán objeto de información en las Cuentas Anuales de 2017

Por Jordi Majoral

El pasado mes de marzo vio la publicación en el BOE de la Orden JUS 319/2018 por la que se aprueban los modelos oficiales para la presentación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

La novedad más destacada que presentan las Cuentas Anuales trae causa en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En virtud de dicha Directiva se incluye un nuevo formulario en el modelo oficial de Cuentas Anuales, el que identifica a los titulares reales de la sociedad. Es preciso mencionar que dicho documento tiene naturaleza extracontable y por ende no forma parte de las cuentas anuales, sino que las acompaña obligatoriamente como ocurre con otros documentos tales como la instancia de presentación, la hoja de datos generales, la declaración medioambiental o el modelo de autocartera.

El citado modelo está estructurado en tres bloques de manera que la información a suministrar va a depender de la existencia o no de titularidad real y en las condiciones en que ésta se manifieste. De este modo, tenemos un:

Primer bloque de información previsto para la identificación del titular real. En este bloque se consignará la información relativa a aquellas personas físicas con un porcentaje de participación superior al 25 por cien. Sobre dichas personas habrá que suministrar la siguiente información: número de identificación fiscal, bien español bien extranjero, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y porcentaje de participación, desglosado según sea directo o indirecto.

El segundo bloque se denomina "titular real persona asimilada" y será objeto de cumplimentación en caso de no existir persona física alguna que posea o controle un porcentaje superior al 25 por cien del capital o de los derechos de voto. Para estos casos la información a suministrar se referirá a los administradores o responsables de la dirección de la entidad.

Finalmente, el tercer bloque de información recibe la denominación de "detalle de las sociedades intervenientes en la cadena de control" y será utilizado en caso de titularidad real indirecta. Si ese fuera el caso, deberá facilitarse información acerca de aquellas entidades a través de las cuales se ostenta la participación indirecta, desglosando los números de identificación fiscal en el extranjero o en España, el nivel que cada entidad ocupa en la cadena de control, sus denominaciones sociales, sus nacionalidades, sus domicilios sociales y sus datos registrales.

Mencionar así mismo que la cumplimentación de este formulario adicional es obligatoria para las entidades sin importar que formulen y depositen sus cuentas con arreglo al modelo "normal", al "abreviado" o al "pyme".

TRANSACTIONS MAY 2018

Data of the Beneficial Owners of Commercial Entities shall be reported in the Annual Accounts 2017

By Jordi Majoral

Order JUS 319/2018 approving the official versions for the filing of the Annual Accounts with the Companies Registry was published in the Official State Gazette BOE in March.

The most remarkable development in the Annual Accounts results from Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing.

Under such Directive, a new form is included in the official version of the Annual Accounts which identifies the beneficial owners of the company. We must mention that such document is of a non-accounting nature and thus is not part of the annual accounts, but it is mandatorily attached thereto as other documents, such as the filing application, the general data page, the environmental declaration or the treasury shares form.

Such form is structured in three sections, so that the information to be reported will depend on the existence or not of a beneficial ownership and the conditions in which this is expressed. There are accordingly:

A first section of information for the identification of the beneficial owner. This section shall include the information relating to such natural persons with a share percentage above 25 per cent. The following information on such persons shall be supplied: tax identification number, either Spanish or foreign, birth date, nationality, residence country and share percentage, broken down as direct or indirect.

The second section is called "person taken as beneficial owner" and shall be filled in if there is no natural person owning or controlling a percentage above 25 per cent of the capital or the voting rights. In such cases, the information to be reported shall refer to directors or managers of the entity.

Finally, the third section of information is called "details of the companies involved in the control chain" and shall be used in the event of indirect beneficial ownership. If this is the case, information shall be supplied on such entities through which indirect ownership is held, breaking down the tax identification numbers abroad or in Spain, the level of each entity within the control chain, their corporate names, their nationalities, their registered offices and their registry details.

Similarly, we must mention that fulfilment of this additional form is mandatory for entities regardless of the fact that they may prepare and file their accounts pursuant to the "normal", "abridged" or "SME" version.

El fin del Geoblocking injustificado: Nuevo Reglamento (UE) 2018/302

Por Alejandro Ferreiro

El pasado 28.02.18 fue aprobado el Reglamento de la Unión Europea (UE) 2018/302, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior, por el que se modifican los Reglamentos (CE) 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE.

El bloqueo geográfico o "geoblocking" es una práctica comercial llevada a cabo por numerosas empresas de comercio electrónico de productos y servicios, consistente en realizar un bloqueo de servicios o de la oferta de productos a clientes en función de su localización geográfica con la finalidad de diferenciar las condiciones comerciales en que venden sus productos en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, dichas empresas imponen barreras para impedir que clientes de otros países de la Unión Europea puedan acceder a sus servicios o productos en las mismas condiciones que los clientes del país de origen de dichas empresas.

Para practicar el *geoblocking*, las empresas recurren a diferentes técnicas y fórmulas como la redirección a páginas web locales con precios diferentes a los ofrecidos en la página web principal, subidas de precios para compradores no residentes en el país o comisiones o tarifas extra por razón de la localización geográfica del cliente. En otras ocasiones, realizar la compra es directamente imposible para el cliente extranjero.

Este tipo de prácticas colisionan directamente con los principales objetivos políticos de la Unión Europea y el Derecho comunitario en materia de competencia, como son la consecución de un mercado único digital, la maximización del bienestar del consumidor y la integración de los Estados miembros y sus economías, considerándose como prácticas discriminatorias para los consumidores cuando las mismas están injustificadas. En este sentido, hace tiempo que la Unión Europea consiguió abolir las fronteras comerciales físicas para los ciudadanos comunitarios. Gracias a ello, estos pueden, por ejemplo, comprar cualquier producto en cualquier país europeo sin necesidad de declararlo cuando pasan una frontera. Sin embargo, el bloqueo geográfico implica que los derechos de los ciudadanos europeos no se apliquen también en Internet.

El objetivo del nuevo Reglamento Europeo es, pues, eliminar dichas restricciones y desbloquear el comercio electrónico en beneficio tanto de consumidores como de empresas, acabando con la discriminación basada la nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento del cliente.

El Reglamento 2018/302 indica que para lograr el pleno potencial del mercado interior en tanto que espacio sin fronteras interiores, no basta con suprimir las barreras entre los Estados miembros creadas por los propios Estados, ya que esa supresión puede verse afectada por otros obstáculos creados por particulares y que son incompatibles con las libertades del mercado interior. Ello sucede cuando los comerciantes que ejercen su actividad en un Estado miembro bloquean o limitan el acceso a sus interfaces en línea a clientes de otros Estados miembros que desean realizar transacciones transfronterizas. Así pues, la finalidad del Reglamento es adoptar medidas frente al bloqueo geográfico injustificado mediante la supresión de determinadas barreras al funcionamiento del mercado interior.

The end of unjustified Geo-blocking: New Regulation (UE) 2018/302

By Alejandro Ferreiro

On 28.02.2018, Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulations (EC) No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance), was approved.

Geo-blocking is a commercial practice carried out by several e-trade companies of products and services, consisting of blocking a service or product offer from customers according to their geographical location with the purposes of differentiating the commercial conditions in which they sell their products in the different member States of the European Union. Particularly, such companies impose barriers to prevent customers of other countries in the European Union from accessing their services or products in the same conditions as customers of the country of origin of such companies.

For practicing geo-blocking, companies use different techniques and formulas, such as redirection to local web pages with different prices to those offered on the main web page, price increases for non-resident purchasers or commissions or extra rates due to the customer geographical location. On other occasions, the purchase is directly impossible to be made for foreign customers.

This kind of practices directly collide with the main political goals of the European Union and the Community Law on competition, such as the achievement of a digital single market, maximisation of the consumer well-being and integration of the member States and their economies, thus such practices being considered as discriminatory for consumers when the same are unjustified. In this regard, the European Union managed long ago to abolish physical commercial borders for community citizens. Thanks to this, citizens may, for example, purchase any product in any European country without having to declare it when they pass the border. However, geo-blocking implies that the European citizens' rights are not applied on the Internet.

The purpose of the new European Regulation is thus removing such restrictions and unblocking e-trade in the benefit both of consumers and companies and removing discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment.

Regulation 2018/302 states that in order to realise the full potential of the internal market, as an area without internal frontiers in which the free movement of, *inter alia*, goods and services is ensured, it is not sufficient to abolish, between Member States, State barriers alone. Such abolition can be undermined by private parties putting in place obstacles inconsistent with internal market freedoms. That occurs where traders operating in one Member State block or limit access to their online interfaces, such as websites and apps, by customers from other Member States wishing to engage in cross-border transactions. Then, the purpose of the Regulation is to adopt measures against unjustified geo-blocking by removing certain barriers to operation of the internal market.

En concreto, cuando la normativa entre en vigor los vendedores europeos deberán tratar a los consumidores de otros países de la Unión de igual forma que a los consumidores locales, es decir, sin posibilidad de aplicar filtro de geolocalización, en los siguientes casos:

- (i) Adquisición de bienes, cuando la entrega al cliente tenga lugar en un país miembro donde el comerciante ofrezca la venta y entrega en sus condiciones generales. Esto implica que cualquier tienda online europea deberá vender sus productos físicos a cualquier cliente de la Unión Europea, aunque ninguna compañía estará obligada a enviar un producto a un estado donde no haga entregas, debiendo pactar en ocasiones vendedor y cliente para que este último de encargue de la recogida del producto.
- (ii) Servicios proporcionados a través de Internet que no estén protegidos por derechos de autor, como la computación en nube, el depósito de datos y el alojamiento de sitios web
- (iii) Servicios, como el alojamiento en hoteles y el alquiler de vehículos, que el cliente recibe en el país en el que opera el comerciante.

Asimismo, el Reglamento prohíbe la discriminación injustificada de clientes con relación a los métodos de pago. Así, los comerciantes no podrán aplicar a los clientes diferentes condiciones de pago por razones de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento.

Por otra parte, los comerciantes no podrán bloquear o limitar el acceso de los clientes a sus interfaces en línea por razones de nacionalidad o lugar de residencia, debiendo facilitar una clara y justificada explicación cuando redirijan a un cliente a una versión distinta de la interfaz.

En este contexto, el Reglamento 2018/302 prevé una serie de excepciones o exclusión de su aplicación a una serie de servicios, a los que sí podrá continuar aplicándose el bloqueo geográfico, como aquellos servicios prestados por vía electrónica cuya característica principal sea proporcionar acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas, como libros electrónicos, música o videojuegos. También quedarán excluidos otros servicios, como los financieros, audiovisuales, de transporte, de atención sanitaria y sociales.

En este sentido, el Reglamento excluye de su ámbito de aplicación a los servicios en línea que venden o dan acceso a obras protegidas por derechos de autor en formato digital. Por ejemplo, el Reglamento sí afectará a comerciantes que vendan libros en papel en internet, pero no se aplicará, por el momento, a la venta de libros electrónicos.

No obstante, el artículo 4 del reglamento establece que "*la prohibición de establecer condiciones diferentes no impedirá que los comerciantes apliquen distintos precios en determinados territorios, en la medida en que estén obligados a hacerlo en virtud de la legislación de los estados miembros conforme al Derecho de la Unión*".

En cualquier caso, el Reglamento será aplicable a partir del próximo 03.12.18, por lo que el bloqueo geográfico podría seguir aplicándose hasta dicha fecha. En este sentido, el propio Reglamento prevé que, tras dos años de su entrada en vigor, la Comisión llevará a cabo una primera evaluación de su impacto en el mercado interior, así como del ámbito de aplicación de la Regulación y su posible extensión a determinados servicios prestados por vía electrónica y protegidos por derechos de autor como música, libros electrónicos o software.

Particularly, upon the effective date of the Regulation, the European traders shall treat consumers of other countries of the Union as the local consumers, that is, without possibility to apply any geolocation filter, in the following cases:

- (i) buy goods from a trader and either those goods are delivered to a location in a Member State to which the trader offers delivery in the general conditions of access or those goods are collected at a location agreed upon between the trader and the customer in a Member State in which the trader offers such an option in the general conditions of access.
- (ii) electronically supplied services not protected by copyright, such as cloud services, data warehousing services, website hosting.
- (iii) services, such as hotel stay and vehicle lease, which the customer receives in the country where the trader operates.

Similarly, the Regulation prohibits unjustified discrimination of customers in terms of methods of payment. Therefore, traders may not apply to customers different payment terms based on their nationality, place of residence or place of establishment.

In turn, traders may not block or limit access from customers to their online interfaces based on their nationality or place of residence and shall be obliged to provide a clear and justified explanation when forwarding a customer to a different version of the interface.

In this context, Regulation 2018/302 sets forth a series of exceptions or exclusions of its application to certain services, for which the geo-blocking may continue in operation, such as services electronically rendered whose main characteristic is to provide access to works protected by copyright or other protected services, such as e-books, music or videogames. Other services, such as financial, audio-visual, transport, health and social services shall be also excluded.

In this regard, the Regulation excludes from its application scope such on-line services that sell or provide access to digital works protected with copyright. For example, the Regulation will affect sellers of paper books on the Internet, but it will be applied, for the time being, to e-book sale.

However, article 4 of the Regulation establishes that "*shall not prevent traders from applying different prices to customers in certain territories in so far as they are required to do so under the laws of Member States in accordance with Union law*".

In any event, the Regulation shall be applicable as of 03.12.18, so that geo-blocking could continue in operation until such date. In this regard, the Regulation sets forth that upon its second anniversary, the Commission shall carry out a first evaluation of its impact within the internal market, as well as of the application scope of the Regulation and its possible extension to certain services electronically rendered and protected by copyright, such as music, e-books or software.

El fin del pago fraccionado mínimo en el Impuesto Sobre Sociedades para las entidades de Capital Riesgo.

Por Jordi Majoral

De acuerdo con el Proyecto de Ley 121/20, de Presupuestos Generales del Estado, las entidades de capital riesgo dejarán de estar sujetas al pago fraccionado mínimo del Impuesto sobre Sociedades.

Recordemos que las entidades de capital riesgo son aquellas entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de inversores diversos con la finalidad de generar ganancias y/o rendimientos para los inversores.

El objeto principal de este tipo de entidades, que pueden revestir la forma jurídica de sociedades de capital riesgo o de fondos de capital riesgo, es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UE o del resto de países miembros de la OCDE.

Dicho esto, merece la pena retroceder para recordar que el pago fraccionado mínimo del Impuesto sobre Sociedades es una medida que fue introducida en 2016 con el ánimo de reducir el déficit público de la administración y que consiste en el establecimiento de un importe mínimo a ingresar en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre sociedades de manera que éste no puede ser inferior al 23 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural.

Desde su introducción en 2016, quedaron expresamente fuera de esta medida tanto las Instituciones de Inversión Colectiva como las SOCIMI pero no las entidades de capital riesgo; circunstancia a priori sorprendente por tener todo este tipo de entidades un común denominador; la práctica exoneración de tributación en el Impuesto sobre sociedades.

La inclusión en la obligación del pago mínimo tuvo repercusiones más que notorias para las entidades de capital riesgo por cuanto vieron impactada su rentabilidad al tener que afrontar pagos fraccionados sustanciales que, en algunos casos necesitaron de financiación externa para ser afrontados; en otros dificultaron el cumplimiento de la rentabilidad fijada para sus inversores y, en el peor de los casos, llevó a la deslocalización de una parte de estas entidades en favor de jurisdicciones fiscalmente más beneficiosas, tales como Luxemburgo.

Resulta aún más destacada la repercusión para las entidades y fondos de capital riesgo pues éstas tienen derecho a aplicar una exención del 99 por cien en el Impuesto sobre sociedades, circunstancia que los lleva a solicitar la devolución de prácticamente la totalidad de los pagos a cuenta efectuados.

Si el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no ve alterada su redacción actual, la situación que acabamos de describir dejará de producirse y desaparecerán los altibajos financieros que los desembolsos en concepto de pago mínimo generan en las entidades de capital riesgo.

Legal Newsletter se publica para clientes y amigos de la firma. Los artículos publicados no constituyen asesoramiento legal. Si tiene comentarios o preguntas relacionadas con el contenido de la presente Newsletter, le agradecemos contacte con nosotros por e-mail: newsletter@bartolomebriones.com
Para más información y artículos, por favor consulte nuestra página web: www.bartolomebriones.com

Legal Newsletter is published for clients and friends of the firm. The published articles do not constitute a legal opinion. If you have any comments or questions regarding the content of this Newsletter, we would appreciate contact us by e-mail: newsletter@bartolomebriones.com
For more information and articles, please see our website: www.bartolomebriones.com

©2018 Bartolome & Briones, SLP. Derechos Reservados

The end of the minimum instalment payment in the Corporate Income Tax for Venture Capital entities.

By Jordi Majoral

Pursuant to Draft Act 121/20, on the General State Budget, venture capital entities shall not be subject to the minimum instalment payment of the Corporate Income Tax any longer.

We must remind that venture capital entities are such closed-ended collective investment entities which obtain capital from different investors with the purpose of generating profits and/or returns for the investors.

The main purpose of these type of entities, which may have the legal form of venture capital companies or venture capital funds, is the taking of temporary shares in the capital of companies of a non-real estate or financial nature which, upon taking the shares, are not listed in the first stock exchange or any other equivalent regulated market of the EU or the rest of the countries members of the OECD.

This being said, we must also remind that the minimum instalment payment of the Corporate Income tax is a measure introduced in 2016 with the aim of reducing the public deficit of the administration and which consists of establishing a minimum amount to be credited as payment on account of the Corporate Income Tax, this amount not being lower than 23 per cent of the positive result of the profit and loss account of the year of the 3, 9 or 11 first months of each calendar year.

Since its introduction in 2016, both Collective Investment Institutions such as the SOCIMI were expressly excluded from this measure, but not the venture capital entities; which is at first sight surprising since all these types of entities have a common denominator; the nearly full exemption from payment of the Corporate Income Tax.

Their inclusion in the minimum payment obligation had more than significant effects for venture capital entities since their profitability was affected for being obliged to make important instalment payments which, in certain cases, required external funding to be met; in other cases, performance of the profitability established for their investors was hindered and, if the worst comes to the worst, it caused the relocation of part of these entities in favour of more beneficial jurisdictions, such as Luxemburg.

The impact on venture capital entities and funds is even more remarkable since they are entitled to apply a 99 per cent exemption in the Corporate Income Tax, which leads them to request the refund of nearly all payments on account made.

If the Draft of the General State Budget Act is not altered from its current wording, the situation we have described above would cease and the financial ups and downs that outlays made as minimum payment generate in the venture capital companies, would disappear.



www.bartolomebriones.com / newsletter@bartolomebriones.com /

BARCELONA: Balmes 243, 7º 08006 Barcelona. Tel. +34 93 292 20 20 barcelona@bartolomebriones.com

MADRID: Jorge Juan 30, 4º 28001 Madrid. Tel. +34 91 577 47 47 madrid@bartolomebriones.com